ESTRUCTURA MARCO DE LA SUPERVISION BANCARIA EN EL MERCADO INTERIOR EUROPEO

La Primera Directiva Bancaria del Consejo estableció, en 1977, el principio de que la legislación bancaria comunitaria afecta a todas las instituciones de crédito que reciben depósitos y fondos asimilados y que otorgan créditos, salvo que existan normas específicas que supongan excepciones, aunque la tendencia es a que éstas sean cada vez menos, en el intento de conseguir la igualdad en las condiciones de competencia. **Paolo Clarotti** pasa revista en este artículo a la evolución del marco legislativo sobre supervisión bancaria a partir de esa Primera Directiva, ofreciendo una pormenorizada descripción y un sugerente análisis de sus hitos fundamentales y de los avances de su trayectoria en función del objetivo propuesto de conseguir un «campo de juego igual para todos».

INTRODUCCION

La legislación bancaria de la Unión Europea (antes Comunidad Europea) abarca todas las instituciones de crédito que reciben depósitos y fondos similares reembolsables y que también otorgan créditos, a menos que existan normas específicas que planteen excepciones a esta normativa. Este principio fundamental, cuya importancia he de subrayar, se estableció en la Primera Directiva Bancaria del Consejo de 1977 (1); la tendencia, a partir de esa fecha, ha sido reducir el número de instituciones que gozaban de excepciones. El motivo, tal como se pone de manifiesto en la introducción de la Primera Directiva, es una mezcla de consideraciones de prudencia y de competencia: «... en las instituciones de crédito son necesarios unos requisitos financieros equivalentes con el fin de garantizar

unas salvaguardias similares para los ahorradores y unas condiciones justas de competencia entre los grupos comparables de instituciones de crédito».

Todos los tipos de instituciones de crédito son tratados, en principio, de la misma manera, y por consiguiente existe una igualdad de las condiciones competitivas de acuerdo con las normas de prudencia: el famoso «campo de juego igual para todos» del que tanto se habla. El motivo es que todos los estados miembros han experimentado, en diversos grados, un proceso de «desespecialización» dentro del cual algunos, si no todos, los ofertantes de servicios financieros han ampliado el alcance de sus actividades y han comenzado a competir en nuevos mercados. Las áreas tradicionales de especialización y delimitación de actividades entre grupos de instituciones de crédito han desapa-

recido como resultado de las fuerzas del mercado. La Segunda Directiva Bancaria, de diciembre de 1989 (2), refleja esta evolución, incorporando una amplia gama de servicios bancarios dentro del ámbito de la licencia bancaria única. Dicha evolución ha de ser apoyada con los estándares de prudencia y sentido común de todos los bancos.

El principio está perfectamente demostrado en el caso de la directiva sobre la *ratio* de solvencia, en la que se aplican las mismas ponderaciones al riesgo y las exigencias globales de capital, sin referencia a la composición de los negocios de la institución de crédito en cuestión. Para poner un ejemplo en concreto, existe la misma exigencia de capital para un crédito hipotecario concedido por una institución especializada en créditos hipotecarios que para un crédito hipotecario otorgado por un banco que opera en todo el negocio bancario, o por otro que se concentra en la financiación comercial.

A lo largo de las discusiones previas a la Segunda Directiva Bancaria, se plantearon varias peticiones para la fijación de unos estándares finales de prudencia: una serie de ellos aplicable a aquellas instituciones que operen en el ámbito de la Unión Europea a través de las fronteras nacionales, y otra serie, armonizada total o parcialmente, aplicable a las que limiten su atención a los mercados nacionales. Se decidió que dicha medida iba en contra de la libertad básica para prestar servicios concedida por el Tratado de Roma; una libertad de la que todos disponen y que tenía la finalidad de conseguir la igualdad en la competencia entre las instituciones. Es evidente que aquellas instituciones de crédito que operan en toda la Unión com-

piten en los mercados nacionales con las que solamente se dedican a negocios a escala nacional. La legislación bancaria de la Unión intenta proteger a los depositantes y salvaguardar la integridad del sistema europeo. En otras palabras, intenta, a escala de la Unión, lo que han estado realizando durante décadas las autoridades de control en cada uno de sus países.

DIRECTIVA SOBRE LIBERTAD DE MOVIMIENTO DE CAPITALES Y SEGUNDA DIRECTIVA BANCARIA

En realidad, la directiva sobre la libertad de movimiento de capitales (3) y la Segunda Directiva Bancaria constituyen las bases del mercado interior de servicios bancarios. El marco definido en la Segunda Directiva Bancaria, según la cual a partir del 1 de enero de 1993 la supervisión de las instituciones de crédito será efectuada por el estado miembro en que residan, y según la cual un banco, una vez establecido, podrá crear sucursales libremente en toda la Unión, constituye un importantísimo paso hacia adelante para que los estados miembros cambien radicalmente el procedimiento con el que tradicionalmente habían supervisado tales instituciones. En lugar de solicitar una autorización previa para que los bancos establecidos en la CE abran sucursales en su territorio, los estados miembros tienen que aceptar que tales sucursales operen sin solicitud previa alguna. Para llevar a cabo dicha modificación, era necesario garantizar el hecho de que los supervisores conociesen que se estaban aplicando ciertos estándares mínimos por sus colegas supervisores en todos los estados

miembros. Cualquier institución de crédito establecida en un estado miembro tiene que cumplir, por tanto, una serie de condiciones antes de que se le autorice para operar en toda la Unión Europea.

Una condición necesaria para conseguir un mercado bancario único era la eliminación de los controles de capital todavía existentes en los estados miembros a finales de 1992. Este paso, necesario para asegurar un mercado bancario plenamente integrado, se dio en julio de 1990, aun cuando a algunos países de la Unión Europea se les permitió mantener ciertas restricciones hasta 1992, y a Grecia se la autorizó a mantenerlas hasta junio de 1994.

Naturalmente, estamos en vías de redefinir las normas de supervisión en toda la Unión en un momento de importantes cambios en los mercados financieros. Estamos redefiniendo dichas normas con el fin de estar preparados para asumir unos grandes cambios en el mercado europeo. Por ello, creemos que es muy importante fijar unas orientaciones fuertes y prudentes. Creemos que es preferible extremar la prudencia antes que fijar unos estándares inadecuados. El sistema financiero sobrevivió a la crisis de las bolsas de octubre de 1987, pero sería un error bajar la guardia. Creemos que, en unos momentos en los que los doce mercados nacionales están en vísperas de fusionarse en uno solo, y en los que los mercados de capital poseen una dimensión internacional que se extiende más allá de la zona europea, es también importante que la legislación bancaria europea pueda adaptarse con facilidad en caso de que se produzcan otros cambios en la estructura del mercado y en los instrumentos financieros.

El hecho de que los modelos fijados en la legislación de la Unión sean unos estándares mínimos ayuda a facilitar dicha adaptación. Los estados miembros siempre tienen libertad para aplicar unas normas más estrictas si así lo juzgan necesario. Estas condiciones van desde el nivel mínimo de capital requerido hasta la aptitud y capacidad de los directores. Estas condiciones mínimas no sólo responden a los estándares internacionales más elevados, sino que están dentro de los patrones referidos a las instituciones de crédito.

En este marco, resulta muy importante la cooperación entre los respectivos supervisores; más aún, dichos supervisores tendrán obligación de consultarse entre ellos para la supervisión de las instituciones que operan en los diversos países. Es esencial indicar que nuestra legislación ha eliminado todas las barreras del secreto bancario que pudieran evitar que se pasara una información importante de un supervisor en un estado miembro a su colega de otro estado.

También se ha de reseñar que hemos estado trabajando para que nuestra filosofía liberal del comercio, que permite que los servicios financieros se presten al cliente en un entorno competitivo con la mayor elección posible, se amplíe más allá de las fronteras de la Unión Europea. Así lo atestiguan, por ejemplo, nuestro compromiso con el acuerdo sobre servicios financieros procedente de las negociaciones en Ginebra de la Ronda Uruguay, y las conversaciones que hemos mantenido con nuestros vecinos de la EFTA, que han concluido con la firma del Tratado que creará, a partir del 1.º de enero de 1994, una zona económica europea única.

La Unión Europea ha conseguido que los doce estados miembros se pongan de acuerdo sobre un sistema que abra los mercados, algunos de los cuales habían estado relativamente cerrados y subdesarrollados y, al mismo tiempo, conceda una protección adecuada a los ahorradores, inversores y otros usuarios o consumidores de productos financieros. Quiero subrayar a continuación todos los progresos realizados y las diversas medidas adoptadas en el campo de los servicios financieros.

La Primera Directiva sobre Coordinación Bancaria ha logrado tres objetivos:

— eliminó la mayoría de los obstáculos a la libertad de establecimiento de bancos y otras instituciones de crédito;

— determinó unos estándares comunes para la concesión de licencias bancarias;

— introdujo el principio básico de cooperación entre las autoridades de control de los diferentes estados miembros (con la creación del Comité Asesor Bancario).

Sin embargo, aún existían obstáculos que había que eliminar antes de que pudiera existir un mercado bancario europeo verdaderamente unificado:

— un banco u otras instituciones de crédito necesitaban autorizaciones de 11 diferentes supervisores para abrir sucursales en todos los estados miembros;

— no podían prestarse los servicios bancarios a través de las fronteras en todos los estados miembros;

— no estaban definidas las actividades bancarias.

La Segunda Directiva sobre Coordinación Bancaria tenía como objetivo suprimir todas estas barreras:

— puso en marcha la idea de una licencia bancaria única, con validez en toda la Unión, que pudiera autorizar a un banco o institución de crédito para operar en toda Europa, bien mediante sucursales o con la prestación de servicios transfronterizos;

— esta licencia sería reconocida mutuamente por los demás supervisores bancarios de la Unión Europea;

— se fijó para los nuevos bancos un capital mínimo (fondos propios) de 5 millones de ecus;

— se desglosaron las normas de supervisión con respecto a la administración interna y al sistema de auditoría.

Además de todo lo anterior, y ésta es la característica más avanzada de la Segunda Directiva Bancaria, se otorgan las citadas libertades para una amplia gama de actividades bancarias. Se adjunta a la Directiva una lista de tales actividades que gozan de la liberalización; dicha lista se adapta, más o menos, al modelo de actividad bancaria universal, e incluye no sólo los tradicionales servicios de la banca, sino también la intermediación en acciones y productos derivados, etcétera. Si un banco está autorizado para realizar tales actividades al amparo de su licencia nacional, también podrá realizarlas en los demás estados miembros.

Entre las actividades incluidas en esta lista figuran las siguientes:

• Aceptación de depósitos y de otros fondos reembolsables del público; ésta es la principal actividad y la que marca la diferencia entre un banco y una en-

tidad no-bancaria. Todas las demás actividades de la lista pueden ser ejecutadas por entidades no-bancarias.

• Concesión de préstamos (incluyendo, entre otros, préstamos al consumo, créditos hipotecarios, *factoring*, financiación de operaciones comerciales, etcétera).

• *Leasing* financiero.

• Emisión y administración de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito, cheques de viaje y cheques bancarios).

• Operaciones por cuenta propia o por cuenta del cliente en: *a)* instrumentos del mercado de dinero (cheques, letras, CD, etcétera); *b)* moneda extranjera; *c)* títulos transferibles.

• Participación en las emisiones de títulos.

• Gestión y asesoramiento sobre la cartera, etcétera.

Así pues, el esfuerzo específico de la legislación bancaria europea se centra sobre todo en el tema del pleno acceso al mercado de las instituciones de crédito. Puede desglosarse en dos componentes:

— consecución plena de la libertad para prestar servicios bancarios, sin fronteras, en toda la Unión;

— consecución plena de la libertad para establecer sucursales en toda la Unión, y la posibilidad de que tales sucursales puedan operar tanto con residentes como con no residentes.

El *Libro Blanco* de 1985 estableció el principio según el cual la armonización de las legislaciones nacionales solamente debería llevarse a cabo en aquellos aspectos en los que fuera necesaria, pudiendo mantenerse,

reconocerse y respetarse mutuamente, en todos los casos, los diversos modelos nacionales.

En el sector bancario, que ya está bastante bien integrado en el ámbito de la Unión, pero que también está sometido a una supervisión y normativa detalladas y prudentes, la primera decisión fue la referida al alcance con que podría operar el reconocimiento mutuo sin perjudicar ciertos límites de prudencia. Se decidió que podría aceptarse el reconocimiento mutuo siempre que estuvieran armonizadas y aplicadas por los supervisores que conceden la autorización determinadas áreas clave del control prudencial, relativas a las pruebas para la autorización de las instituciones de crédito y a los estándares en relación con los negocios en marcha.

La armonización mínima esencial acordada por la Comisión, previa consulta con los supervisores bancarios de la Unión, comprende:

- capital mínimo para autorizar y continuar los negocios (en la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria);
- adecuación del capital en relación con el riesgo incurrido (en las directivas sobre fondos propios y sobre *ratio* de solvencia);
- límites en la concentración de préstamos (en la directiva sobre amplias exposiciones);
- control efectivo de supervisión sobre los principales accionistas;
- control de las participaciones importantes del banco en el sector no bancario (estos dos últimos, ambos en la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria);

— la existencia de sistemas de garantía de depósitos que cubren todas las instituciones de crédito en la Unión.

Todos estos objetivos se han conseguido, con excepción de los sistemas de garantía de depósitos, sobre los cuales aún se está estudiando la correspondiente propuesta de la Comisión en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.

Se pretende que estas normas prudenciales armonizadas sean implantadas por las autoridades de cada país; es decir, por los responsables de la autorización nacional. No se trata de un principio revolucionario, sino que es ya una práctica de supervisión estándar en la Unión Europea, introducida en los primeros años de 1980 con la Directiva Consolidada de Supervisión del Consejo de 1983 (4) y con el acuerdo revisado del Comité de Supervisores de Basilea. Sin embargo, su importancia será mucho mayor en el mercado interno, debido a que está claro que aumentarán la amplitud de las interrelaciones europeas y la prestación de servicios sin fronteras.

El efecto de todo ello es la sustitución de unas licencias bancarias nacionales por una licencia para toda la Unión, válida para establecer sucursales en todas partes sin necesidad de una autorización concreta para cada una de ellas. En otras palabras, una autorización sustituye a doce. El sistema, naturalmente, no excluye las normas subsidiarias que sean incorporadas por las correspondientes autoridades nacionales de supervisión.

La otra decisión fundamental se refería a los servicios bancarios que se beneficiarían de la libertad de establecimiento y prestación de servicios sin fronteras.

En este asunto, la definición aportada por la Primera Directiva Bancaria sobre la institución de crédito no ayudaba mucho. En la lista que se adjunta a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, ya mencionada, se decidió definir los servicios bancarios de una manera práctica con referencia a las funciones principales de los bancos universales, bien conocidas en Alemania y en Holanda y, en cierta medida, también en Francia y en el Reino Unido. Aun así, esta lista ha de ser considerada como un mínimo, y los estados miembros anfitriones han de «garantizar que por lo menos las actividades indicadas en la lista» podrán ser realizadas en su territorio por las instituciones de crédito autorizadas en otros lugares de la Unión Europea. La condición calificadora es que la institución de crédito que ofrece tales servicios, bien a través de su sucursal en el país anfitrión o por medio de una oferta a través de las fronteras, no está autorizada para hacerlo a menos que lo esté en su país de origen.

El mecanismo de habilitación del control del país de origen, junto con los detalles de funcionamiento de la licencia bancaria única, figuran en la Segunda Directiva sobre Coordinación Bancaria. La primera de sus reglas se refiere a un requisito mínimo de capital de 5 millones de ecus para obtener la autorización. Esta disposición puede considerarse como un desarrollo directo del artículo 3 de la Primera Directiva Bancaria, que pone como condición para la autorización la exigencia de que «la institución de crédito debe poseer un mínimo adecuado de fondos propios».

Las razones de prudencia que respaldan la introducción de una exigencia de capital mínimo

absoluto, distinta de la exigencia de una cierta cobertura de capital para los riesgos bancarios, se basan en que las instituciones de crédito han de tener un tamaño mínimo antes de que puedan realizar la prestación satisfactoria de los servicios bancarios, y en que es necesario un cierto nivel de capital para hacer frente a las demandas imprevistas y no relacionadas con los riesgos bancarios ordinarios.

La Segunda Directiva Bancaria incluye también cierta armonización del control sobre los principales accionistas. Contiene, asimismo, una exigencia básica de información, y la disposición en virtud de la cual los supervisores deben intervenir para detener la influencia del accionista que sea perjudicial para la administración correcta de la institución de crédito. En dicha actuación se incluye tanto la supervisión de la autorización como la de las operaciones corrientes.

Podríamos clasificar las consideraciones de prudencia que respaldan esta disposición como «tradicionales» y «modernas». La consideración «tradicional» es la preocupación básica y habitual del supervisor sobre la habilidad de aquellos que están relacionados con las instituciones bancarias, y en particular con los que toman decisiones. Por su parte, la consideración «moderna» es que la aparición de formas más complejas de la estructura de los negocios, en los cuales los bancos pueden participar dentro de conglomerados diversos, plantea problemas de financiación cruzada y conflictos de intereses.

Estas consideraciones subyacen también en la disposición que limita la participación individual de las instituciones de crédito en compañías no financieras

a un importe no superior al 15 por 100 de sus fondos propios, y las participaciones acumuladas de este tipo al equivalente del 60 por 100 de los fondos propios. Sin embargo, es muy importante señalar que estos techos no se aplicarán si las participaciones en cuestión se deducen de los fondos propios (naturalmente, si el banco tiene fondos propios suficientes además de los exigidos para cubrir la *ratio* de solvencia).

No he tratado todos los contenidos de la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria; solamente me he ocupado de los más importantes, si bien quisiera decir unas palabras sobre áreas que o bien se han dejado fuera del enfoque principal por el momento o podrán dejarse fuera del mismo.

La primera de tales excepciones se refiere a las áreas que caen fuera del principio general de control en el país propio. Hasta que se produzcan posteriores armonizaciones, las autoridades del país anfitrión seguirán manteniendo la responsabilidad principal en la supervisión de la liquidez, y en la conducción y puesta en marcha de la política monetaria. Sin embargo, las autoridades del país de origen seguirán manteniendo la responsabilidad de la supervisión de los riesgos de mercado derivados de las posiciones abiertas mantenidas en operaciones con valores en cooperación con los supervisores del país anfitrión: así sucederá hasta que entren en vigor, el 1.º de enero de 1996, las dos directivas sobre adecuación del capital para las firmas de inversión e instituciones de crédito (aprobada el 15 de marzo de 1993) y sobre servicios de inversión (aprobada el 10 de mayo de 1993).

Vamos a examinar ahora las otras partes esenciales de la legislación bancaria de la Unión Europea.

OTRAS DISPOSICIONES DE REGULACION BANCARIA

Directiva sobre fondos propios

Una importante directiva resolvió el problema de la definición, a efectos de supervisión, de los fondos propios de los bancos: fue aprobada en abril de 1989 (5). El primer enfoque fue muy similar al que se adoptó en el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria en julio de 1988. Los fondos propios forman, entre otros, el numerador de una *ratio* de solvencia aplicable a las instituciones de crédito de la Unión Europea que mencionaré más tarde.

Constan de las siguientes partidas:

- 1) Capital, en la medida en que haya sido desembolsado.
- 2) Reservas y pérdidas y ganancias pendientes de aplicación.
- 3) Reservas por revalorización.
- 4) Fondos para riesgos generales bancarios.
- 5) Ajustes de valor.
- 6) Otras partidas que, con independencia de su denominación legal o contable, tengan las siguientes características:
 - a) que sean de libre disposición por las instituciones de crédito para cubrir los riesgos bancarios normales cuando las pérdidas o ganancias de capital aún no hayan sido identificados;
 - b) que su existencia figure en los registros contables internos;

c) que su importe venga determinado por la dirección de la institución de crédito, verificado por auditores independientes, dado a conocer a las autoridades competentes y colocado bajo la supervisión de dichas autoridades;

d) que no puedan ser reembolsadas por iniciativa del portador, o sin el previo acuerdo de la autoridad de supervisión.

Los títulos valores de duración indeterminada y otros instrumentos que cumplan las condiciones reseñadas se incluyen en estas partidas. A ellas han de añadirse las acciones preferentes acumulativas sin plazo fijo.

7) Las aportaciones de los socios de las instituciones de crédito creadas como cooperativas, y las obligaciones contractuales mancomunadas y solidarias de los prestatarios de ciertas instituciones organizadas como fondos.

8) Financiación subordinada y acciones preferentes acumulativas con plazo fijo.

Al efectuar el cálculo, han de deducirse algunas partidas, tales como las acciones propias en poder de un banco, los activos intangibles, las pérdidas importantes del año y las participaciones de consideración en otras instituciones de crédito. Además, el cálculo ha de efectuarse sobre una base consolidada.

Lo que debemos tener en cuenta es que el capital, las reservas y los fondos para riesgos bancarios generales han de considerarse en su importe total. Todos los demás elementos no podrán superar el importe del capital más reservas. Sin embargo, el conjunto de estos elementos, y las aportaciones de los socios de cooperativas, las acciones pre-

ferentes acumulativas a plazo fijo y los préstamos subordinados no podrán exceder del 50 por 100 del importe arriba indicado.

Aun cuando muchos crean que la definición de fondos propios realizada por la UE ha sido tomada de la recomendación de Basilea, la realidad es muy distinta. Son las diversas *ratios* de prueba que la Comisión ha utilizado durante diez años, a partir de 1979, las que han conducido a la definición de Basilea, con algunos ajustes debidos a la necesidad de adaptarse, en alguna medida, a las exigencias particulares de algunos miembros del G-10 que no pertenecen a la UE (Japón y Estados Unidos, especialmente).

Los fondos propios se definen en una directiva particular y, a diferencia de la recomendación de Basilea, no son tratados en un documento único junto con la *ratio* de solvencia. La razón es que los fondos propios, tal como se definen en esta directiva, constituyen no solamente el numerador de la *ratio* de solvencia, sino también un criterio de cálculo de otras medidas prudenciales, tales como los límites antes citados de las participaciones no bancarias y los límites a la concentración de riesgos que mencionaremos más adelante.

Directiva sobre *ratio* de solvencia

La directiva sobre la *ratio* de solvencia fue adoptada por el Consejo de Ministros en diciembre de 1989 (6). Aplica una *ratio* del 8 por 100 que relaciona los activos y partidas fuera de balance, ajustadas a fin de reflejar los diversos grados de riesgo del crédito, con los fondos propios disponibles para hacer frente a dichos riesgos.

Por ejemplo, se considera que los estados de los países de la OCDE tienen un riesgo 0, los bancos representan para otros bancos (siempre dentro de la OCDE) un riesgo del 20 por 100, y las hipotecas sobre viviendas representan un riesgo del 50 por 100. Todos los demás riesgos —es decir, todos los préstamos a empresas comerciales e industriales— tienen una ponderación del 100 por 100. Hay que recordar que, para cumplir con la *ratio* del 8 por 100, al menos un 4 por 100 ha de ser cubierto por los llamados «fondos propios TIER 1»; es decir, el capital, las reservas y el fondo para el riesgo bancario general. Todas las demás partidas no podrán cubrir más que el restante 4 por 100, cualquiera que sea su importe (TIER 2).

La directiva sobre la *ratio* de solvencia que aprueba dicho enfoque sobre la ponderación del riesgo contiene también un amplio tratamiento de las partidas fuera de balance.

El ajuste del riesgo contenido en la *ratio* de solvencia se refiere sólo al riesgo de crédito (el riesgo de que el cliente del banco no cumpla sus compromisos) y al riesgo de transferencia (el riesgo de que los clientes extranjeros no cumplan debido a la escasez de divisas en su país). No están cubiertos los riesgos del mercado que surgen cuando una institución de crédito mantiene una posición abierta en un instrumento financiero sensible al precio. Tales riesgos serán cubiertos por la directiva sobre adecuación del capital que ya he mencionado anteriormente, y sobre la que hablaré más tarde.

Las directivas que he comentado hasta ahora constituyen el denominado paquete mínimo para el establecimiento del mer-

cado interior bancario a partir del 1.º de enero de 1993, si bien no son las únicas que están en vigor en el campo de la supervisión adecuada y prudente. Existen otras dos que me gustaría mencionar: la directiva sobre supervisión consolidada (7) y la directiva que limita las concentraciones de grandes riesgos de las instituciones de crédito (8).

Directiva sobre supervisión consolidada

En cuanto a la directiva sobre supervisión consolidada, desde hace tiempo los grupos de empresas constituyen un fenómeno en los negocios difícil de abordar por parte del legislador, cuya atención se centraba sobre todo en las compañías individuales e independientes. Ello era especialmente cierto cuando los grupos eran multinacionales. Este mismo fenómeno se ha producido en la banca.

Cuando los supervisores nacionales de los bancos se han ido especializando y se han hecho más exigentes, los grandes bancos nacionales han intentado utilizar las posibilidades que se les brindaban en otros estados miembros con menos restricciones en cuanto a política monetaria, tales como Luxemburgo. Por ejemplo, un gran número de bancos alemanes crearon allí filiales que no estaban sujetas a la legislación bancaria alemana, y ello pasó a convertirse en una preocupación para la agencia de supervisión bancaria alemana. Sin reformas legislativas, la única forma de ejercer algún tipo de supervisión sobre los grupos bancarios multinacionales era la firma de varios acuerdos voluntarios, difíciles de alcanzar, entre la Oficina de Control Federal de Berlín y los bancos alemanes

acerca de sus filiales en Luxemburgo. La directiva sobre la supervisión consolidada de los bancos, de 13 de junio de 1983, constituyó un gran paso adelante para la resolución de estos problemas. Sin embargo, esta directiva es sólo un marco necesario para la supervisión consolidada de las instituciones de crédito. Se precisaban otros pasos más avanzados, que se han dado paulatinamente.

Por este motivo, la Comisión Europea comenzó a trabajar en una revisión en 1988, y presentó una nueva propuesta de directiva sobre la supervisión consolidada de los bancos el 9 de octubre de 1990, que fue aprobada el 6 de abril de 1992. La antigua directiva solamente se aplicaba a aquellos grupos de empresas a cuya cabeza estaba un banco. La directiva revisada se aplica a todos los grupos bancarios, incluyendo aquellos cuya matriz ya no es una institución de crédito, sino un *holding* financiero de empresas. Sin embargo, al menos una institución de crédito ha de ser miembro del grupo. Además, el umbral de consolidación en la antigua directiva era del 25 por 100, y en la nueva es del 20 por 100.

Por lo que respecta a las técnicas de consolidación, la nueva directiva exige una consolidación plena de las participaciones mayoritarias y de los grupos en los que, de acuerdo con la opinión de la autoridad supervisora, la matriz ejerce efectivamente una influencia dominante. No obstante, existe una cláusula de salvaguardia si la responsabilidad de los demás accionistas está claramente determinada. En algunos casos, es suficiente la consolidación proporcional de las participaciones. En los demás casos —por ejemplo, cuando se ejercita

de hecho una participación importante—, el método de consolidación lo determina la agencia de supervisión. Hasta que lleguemos a una posterior coordinación de los métodos de consolidación, los grupos con actividad combinada —por ejemplo, los que tienen a su cabeza compañías industriales o comerciales, e incluyen bancos y otras instituciones financieras— no están sujetos a la supervisión en base consolidada, si bien la autoridad supervisora del principal banco del grupo está facultada para recibir alguna información de la matriz, cuando tal información sea necesaria para supervisar, de una forma adecuada, al subgrupo financiero del grupo.

Directiva de limitación de grandes riesgos

La diversificación o cobertura de los riesgos es una regla de oro para la actividad financiera en general. La primera responsabilidad de las autoridades de supervisión es asegurar la estricta observancia de esta regla por las instituciones de crédito. En el área de los riesgos de crédito, una concentración excesiva del riesgo con una sola entidad o grupo podría perjudicar la independencia de la dirección de las instituciones de crédito; en el caso de que dicha entidad fallase, podría causar una pérdida que amenazara su estabilidad.

Por consiguiente, ésta es una regla clave de la supervisión que debe ser armonizada en el ámbito de la Unión. Además, se hizo una mención específica de ello en el *Libro Blanco* de la Comisión, relativo a la finalización del mercado interior. Sin embargo, había una segunda razón para dicha armonización: la necesidad de evitar las evidentes distorsiones de

la competencia. Como las normas que regulan la diversificación de riesgos están destinadas principalmente a limitar la asistencia financiera que una institución de crédito puede otorgar a un cliente determinado, otra institución tendría una ventaja competitiva si estuviera sujeta a unas reglas menos estrictas.

En línea con los objetivos señalados en el *Libro Blanco*, la Comisión adoptó en 1986 una recomendación sobre grandes riesgos (9), con el fin de preparar gradualmente a las instituciones de crédito y a los estados miembros para la adopción de normas vinculantes. En la introducción a dicha recomendación se prometía específicamente una propuesta posterior de directiva. La cercana fecha tope para el mercado interior y el acuerdo alcanzado por las autoridades nacionales de supervisión dentro del Comité Asesor Bancario sugerían que ya era hora de adoptar una directiva. Por ello, la Comisión publicó, en abril de 1991, una propuesta que fue adoptada, finalmente, por el Consejo de Ministros de la UE el 21 de diciembre de 1992.

La directiva contiene unas normas más estrictas que las indicadas en la recomendación. Por mencionar solamente las reglas clave, el límite absoluto sobre los riesgos con un solo cliente ha sido fijado en un 25 por 100 de los fondos propios de las instituciones de crédito prestamistas (el porcentaje que figuraba en la recomendación era del 40 por 100), mientras que el umbral a partir del cual un riesgo se considera grande se ha reducido al 10 por 100 de los fondos propios de la institución de crédito prestamista (en la recomendación era del 15 por 100).

El reforzamiento de las normas responde a los deseos seriamente expresados por los supervisores bancarios, y está también apoyado en un documento sobre prácticas correctas presentado por el Comité de Basilea sobre la supervisión bancaria en la conferencia mundial de supervisores de bancos celebrada en Francfort en octubre de 1990. Unas normas más estrictas solamente pueden potenciar la solidez y la estabilidad del sistema bancario de la Unión Europea. Además, un límite del 25 por 100 de los fondos propios de la institución prestamista no puede considerarse excesivamente bajo, ya que si un cliente con el que se ha incurrido en un gran riesgo fallara, la institución de crédito podría perder una cuarta parte de sus fondos propios, lo cual es un importe considerable y, por lo tanto, debía reducirse aún más. En todo caso, se trata de un techo; las instituciones de crédito deben autocontrolarse, y no alcanzar ni aproximarse a ese límite más que en casos de riesgos fuertemente asegurados.

Sin embargo, la importante reducción en el límite superior (comparada con la que figuraba en la recomendación) puede plantear problemas de ajuste para algunas instituciones de crédito o, de una forma más estructural, para algunos sistemas bancarios, o parte de sistemas bancarios. Además, la asistencia financiera ya concedida por encima del 25 por 100 de los fondos propios no siempre puede ser reducida rápidamente por las instituciones de crédito que están vinculadas contractualmente con los receptores de la financiación. En consecuencia, la directiva contiene una disposición que faculta a las autoridades competentes para otorgar a las instituciones de crédito

un período máximo de ocho años, dividido en dos etapas (la primera hasta finales de 1998 y la segunda hasta finales de 2001), para adaptar los actuales riesgos a los límites fijados. Además, pueden mantenerse hasta que venzan los préstamos de plazo mayor, con unas cláusulas contractualmente vinculantes para la institución prestamista.

La directiva estipula, como ya he mencionado anteriormente, que un riesgo con un cliente o grupo de clientes conexos ha de considerarse como gran riesgo siempre que su valor sea igual o superior al 10 por 100 de los fondos propios de la institución prestamista. La reducción de este umbral, dispuesta por la recomendación de 1986, está justificada por la necesidad general de hacer más estricto el sistema de supervisión de los grandes riesgos, con el fin de reforzar la estabilidad del sistema bancario de la Unión Europea. Más en concreto, una vez recortado el techo de los riesgos individuales, resulta lógico reducir el umbral respectivo. Algunos países ya emplean un umbral del 10 por 100, y la Comisión considera, a la luz de su experiencia, que dicho umbral no puede considerarse como algo que imponga unas obligaciones demasiado burocráticas.

Como puede verse, la directiva ha hecho más estrictos los límites fijados en la recomendación de 1986. Pero también ha añadido un límite que no figuraba en dicha recomendación. Los supervisores bancarios saben, por experiencia, que se incrementa el riesgo cuando la institución de crédito presta a empresas vinculadas con ella. El Comité Asesor Bancario pidió a la Comisión que fijara un límite menor de exposición con respecto a las empresas vinculadas (empresa matriz de la

institución de crédito y otras subsidiarias de dicha empresa matriz). La Comisión ha fijado este límite más bajo en un 20 por 100 (comparado con el límite normal del 25 por 100).

Por último, la Comisión ha mantenido el límite acumulado de los grandes riesgos fijado en la recomendación; es decir, el 800 por 100 de los fondos propios. Sin embargo, como el concepto de *gran riesgo* se ha ampliado, este límite se ha hecho indirectamente más estricto.

Un límite acumulado es un complemento valioso para la limitación de los riesgos individuales en la legislación que rige los grandes riesgos. Mientras que la limitación de los riesgos individuales garantiza que ningún riesgo supere el techo fijado, no afecta a la dispersión de los riesgos en toda la cartera. Sin embargo, un límite acumulado del 800 por 100 significa que una institución de crédito puede tener como mucho 80 grandes riesgos, y un máximo de 32 riesgos que alcancen el techo individual del 25 por 100 de los fondos propios.

LEGISLACION SOBRE IGUALDAD COMPETITIVA ENTRE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La legislación que comentaré a continuación tiene como finalidad asegurar la igualdad en la competencia entre bancos y otras instituciones de crédito dentro de la Comunidad. Esta legislación incluye:

- Una directiva, de diciembre de 1986 (10), que contiene las normas sobre las cuentas anuales y consolidadas de los bancos, seguida por otra directiva, de fe-

brero de 1989 (11), sobre los requisitos de publicidad de las sucursales extranjeras. En sentido estricto, no son directivas que traten sobre las normas prudenciales, si bien su implantación ha logrado mejorar, ciertamente, la transparencia del mercado bancario europeo.

- Una directiva, aprobada en junio de 1991 (12), cuyo objetivo es obligar a los bancos a participar en la prevención del blanqueo de dinero, que, al igual que las últimas citadas, no puede considerarse como normativa prudencial, sino que desempeña una función positiva en la lucha contra el fraude dentro de los sistemas bancarios nacionales de la Unión Europea. Además, esta última directiva no se aplica solamente a los bancos o a las instituciones de crédito, sino a todos los tipos de las denominadas «empresas financieras», que incluyen las entidades de inversión, las compañías de seguros, las oficinas de cambio, etcétera.

Otras dos importantes directivas, aprobadas en 1993, no se aplican sólo a las instituciones de crédito, sino también a las entidades de inversión: son la Directiva sobre Adecuación del Capital y la Directiva sobre Servicios de Inversión.

La Directiva sobre Adecuación del Capital (DAC) fue propuesta en 1990, y se aprobó el 15 de marzo de 1993 (13): permitirá a los supervisores fijar unas exigencias de capital para los bancos, así como para las entidades de inversión no bancarias, en los mercados de valores, que son prudentes y que ofrecen un campo de juego igual tanto para los bancos como para los inversores no bancarios que operan en el mismo negocio. Por ello, la DAC dispone la medida de las exigen-

cias de capital, frente a una posición particular en valores, de forma que sea prácticamente la misma para un banco que para una empresa de inversiones no bancaria que la posea.

Esta directiva contiene disposiciones sobre el riesgo del mercado, en relación con los movimientos de los tipos de interés y las cotizaciones de los títulos que no han sido tenidos en cuenta ni por la legislación de la UE ni por la mayoría de los supervisores nacionales, y determina que los supervisores de los bancos universales podrán aplicar las exigencias de capital a los no-bancos por las partidas en balance de sus operaciones. Esta directiva entrará en vigor el 1.º de enero de 1996, debido a los importantes cambios que producirá en los mercados financieros de la mayoría de los países de la Unión Europea.

La DAC fue un resultado necesario de la propuesta de una directiva sobre servicios de inversión en el campo de los valores (la ISD), que fue presentada por primera vez por la Comisión en enero de 1989 (14). La ISD pretende abrir el camino a las entidades de inversión autorizadas en su estado miembro original para que tengan acceso a los mercados financieros de todos los demás estados miembros —bien estableciendo sucursales, bien prestando en ellos sus servicios— con base en ciertas condiciones que son muy similares a las de los bancos en la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria. Esta libertad ha de basarse en una coordinación de las reglas clave con respecto a la autorización y la supervisión de la marcha de las instituciones correspondientes.

La coordinación ha de lograr el principal objetivo de la pro-

puesta, consistente en asegurar que tanto la salud del sistema financiero general como, en particular, de los inversores se vean adecuadamente protegidas en un nuevo mercado europeo integrado. También han de alcanzarse otras dos finalidades. En primer lugar, hay que establecer un amplio campo de juego igual para entidades de inversión y para bancos que operen en los mercados de valores. De acuerdo con este objetivo, las normas fijadas en la directiva no han de brindar un incentivo a una entidad comprometida en actividades de inversión para optar por una estructura institucional (por ejemplo, la de una entidad de inversión) mejor que por otra (un banco). En segundo lugar, la directiva tiene que promover, o por lo menos no impedir, la atracción de Europa como centro financiero.

Aunque se han hecho progresos en el camino hacia un mercado único de capitales en la UE, todavía no tenemos un pasaporte europeo para los intermediarios de inversiones no bancarias. En realidad, éste era el objetivo de la propuesta de una directiva sobre los servicios de inversión cuyo ámbito abarca a los gestores de cartera y a otros intermediarios de inversiones, y que se podrá aplicar, en una medida limitada, a los bancos.

La Directiva ISD fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de mayo de 1993, si bien, al igual que la DAC, entrará en vigor el 1.º de enero de 1996.

El estado miembro en que una sociedad de inversiones haya sido creada es el «estado miembro nacional» de la entidad. El estado miembro en el que ésta lleve a cabo sus actividades en cuestión puede ser su estado nacional u otro estado miembro de

la UE, denominado «estado miembro anfitrión». Una vez autorizada en su estado nacional, la sociedad de inversiones es libre para realizar cualquier servicio de inversiones para el que haya sido autorizada en su estado nacional, en cualquier otro estado miembro, bien mediante la creación de una sucursal o bien operando a través de las fronteras. A esto se le suele llamar el «pasaporte europeo».

En muchos aspectos, la sociedad de inversiones se regirá por las normas de su estado nacional. Estos aspectos suelen ser los denominados estructurales y de regulación prudencial. Sin embargo, por ahora se considera imposible armonizar las normas relativas a la publicidad y a la realización de los negocios, y estos asuntos seguirán siendo de competencia del estado anfitrión.

A modo de conclusión de este breve análisis de la ISD, quisiera recordar que la definición de las empresas de inversión abarca a los bancos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los bancos ya disponen de un pasaporte europeo, de acuerdo con la Segunda Directiva Bancaria, solamente se aplicarán tres artículos a las instituciones de crédito. Son los siguientes:

- Una disposición que indica que las empresas de inversión deben cumplir la directiva de adecuación de capital.
- Una disposición que indica que los estados miembros deberán fijar las normas de realización de los negocios que han de ser observadas por las empresas de inversión, incluyendo a los bancos.
- Una disposición destinada a proporcionar a las empresas de inversión, incluyendo a los ban-

cos, acceso a las bolsas y a cualquier otro mercado de valores organizado.

Con respecto a este último punto, el acuerdo alcanzado en el Consejo afectaba también al derecho de los bancos de un estado perteneciente a la UE a ser miembros de las bolsas de comercio de los demás países de la Unión. La directiva permitirá también que los bancos que realizan negocios de inversión sean socios de las bolsas de comercio de los demás países, sin tener que establecer sucursales en dichos países. Los países que, como España, se manifestaron en contra de dicha libertad solamente han obtenido unos años de período transitorio antes de estar obligados a concederla (1999, en lugar de 1996).

PROPUESTAS DE DIRECTIVAS EN CURSO

Con las anteriores directivas podemos decir que se ha completado la «lista de la compra» de las directivas existentes en el campo de la banca. Sin embargo, este artículo no estaría completo si no mencionáramos dos propuestas importantes de directivas que están en una fase avanzada de su proceso legislativo: son las propuestas sobre sistemas de garantía de depósitos y sobre potenciación de la supervisión prudencial en el campo de todas las empresas financieras (la denominada directiva «post-BCCI»).

Sobre sistemas de garantía de depósitos

Con respecto a los sistemas de garantía de depósitos, la Comisión publicó primero una recomendación a finales de 1986 (15). Dicha recomendación,

que no es un instrumento vinculante, tenía como objetivo principal hacer obligatoria la participación como socios de dichos sistemas para todas las instituciones de crédito de la UE. Sin embargo, cada estado miembro tenía libertad para determinar si dichos sistemas habrían de organizarse de forma privada o pública. La recomendación de la Comisión ha sido seguida solamente por cuatro estados miembros; seis ya tenían un sistema de protección de los depósitos; dos aún no disponen de sistema alguno. Por ello, la Comisión publicó, en junio de 1992, una propuesta de directiva (16).

A la vista de los sistemas existentes, en todos los estados miembros habrá que crear un nivel mínimo de cobertura. A este respecto, se ha propuesto la implantación de un umbral de 20.000 ecus. La cobertura habrá de centrarse en los depositantes más que en los depósitos. Están en marcha los estudios sobre esta propuesta, si bien ya se ha tomado una decisión importante en el Consejo de Ministros del 25 de octubre de 1993, en el que se adoptó una posición común con base en la propuesta de la Comisión.

Sobre potenciación de la supervisión prudencial

La segunda nueva propuesta (17), de 28 de julio de 1993, constituirá un complemento de la primera y segunda directivas de coordinación bancaria. Estas adiciones son el resultado de la famosa crisis del BCCI, que puso en evidencia algunas lagunas no sólo en la actual normativa bancaria de la UE, sino también en la normativa similar relativa a las compañías de seguros, entidades de inversión y UCITS.

En realidad, habrá cuatro nuevas disposiciones. La primera estará referida a las estructuras de grupo. Las directivas actuales fijan las condiciones que se han de cumplir antes de que las autoridades competentes de los estados miembros concedan una licencia bancaria (o de seguros, o de inversión); sin embargo, estas condiciones aún no incluyen el requisito de que cuando una institución de crédito (o una compañía de seguros, o una sociedad de inversiones, etc.) pertenezca a una estructura de grupo, esta última deberá tener la transparencia suficiente para permitir la supervisión efectiva de la institución de crédito.

Además, las actuales directivas exigen que las solicitudes de autorización vengán acompañadas por una descripción de la estructura organizativa de la institución de crédito, y determinan que se someta a las autoridades competentes la información sobre la identidad de los accionistas o personas similares, y sobre el importe de las participaciones; también determinan que estas autoridades competentes deberán negar la autorización si existen circunstancias que no garanticen la adecuada y prudente gestión de la institución de crédito.

Sin embargo, no se ha previsto nada de similares características en el caso de las actuales instituciones de crédito, y ésta es la razón por la que en la nueva directiva se ha aclarado que todas las modificaciones importantes de las condiciones en las que se basó la concesión de la licencia por parte de las autoridades competentes deberán ser notificadas a dichas autoridades para su reconsideración, con el fin de volver a determinar si cumplen con los objetivos de garantía de una estructura de grupo. De la misma

forma, en caso de que una institución de crédito existente se transforme de tal manera que haya una falta de transparencia, imposibilitando una efectiva supervisión, tal transformación otorga los poderes necesarios a las autoridades de supervisión para retirar la licencia concedida.

La segunda disposición trata del problema de no tener la sede central y la sede social en el mismo estado miembro. Es evidente que la eficaz supervisión de una institución de crédito puede verse impedida si las autoridades competentes no pueden mantener un contacto efectivo con la dirección, debido a que la sede central de esa institución de crédito está situada en un país diferente de aquel en el que se encuentra la sede social; por este motivo, la sede central de una institución de crédito deberá estar situada en el mismo país que la sede social; este requisito, que ya figuraba en la declaración octava de la Segunda Directiva Bancaria, deberá convertirse en una disposición vinculante.

La tercera disposición se refiere al intercambio de información entre las autoridades competentes. La Segunda Directiva Bancaria y las correspondientes directivas en el campo de otras empresas financieras ya indican una lista restringida de organismos a los que puede pasarse la información por las autoridades competentes; con el fin de mantener la confidencialidad, se limitaba mucho la lista de receptores de dicha información. Sin embargo, a la vista de lo ocurrido con el BCCI y de otros acontecimientos, se consideró conveniente incluir en dicha lista reducida a ciertos organismos que desempeñan un papel clave cuando son necesarias investigaciones sobre una institución de

crédito para apoyar los objetivos de supervisión.

La última disposición se refiere a los auditores externos. Las directivas actuales disponen ya el intercambio de información confidencial entre las autoridades competentes y las personas responsables de efectuar las auditorías reglamentarias de las cuentas de las instituciones de crédito y de otras instituciones financieras; debido al acceso de los auditores al material esencial referido al cumplimiento, por parte de las instituciones de crédito, de sus obligaciones, y para proteger a los depositantes, los auditores se verán obligados a pasar cierta información importante a las autoridades de supervisión. De momento, se ha dejado de lado otra iniciativa, que consistía en que los grupos bancarios tuvieran obligatoriamente el mismo auditor externo.

RESUMEN: ESTADO DE LA CUESTION

Ahora bien, ¿cuál es la situación con la puesta en marcha de las actuales directivas?

Debo decir que, con respecto al paquete central necesario para poner en marcha el mercado interior en el sector bancario, la situación ha de considerarse muy positiva. En contra de lo que sucedió hace pocos años, cuando muchos estados miembros no adoptaban algunas directivas incluso algunos años después de la fecha obligada de puesta en marcha (por ejemplo, la Primera Directiva Bancaria, de 1977, solamente se ha puesto plenamente en marcha en 1988, y la directiva sobre cuentas bancarias de 1986 aún no ha sido adoptada por todos los estados miembros), las tres directivas bancarias básicas

han sido incorporadas prácticamente por todos los estados miembros ya en su fecha programada; es decir, antes de finalizar 1992 o bien en el primer trimestre de 1993. Según mis noticias al respecto, existe una sola excepción: España aún no ha adoptado plenamente la Segunda Directiva Bancaria. La crisis política que ha afectado a este país, y que tuvo como consecuencia las elecciones anticipadas del 6 de junio de 1993, ha retrasado el proceso de adopción de la Segunda Directiva Bancaria.

A finales del año anterior, se discutió sobre cuáles habrían sido las consecuencias para el mercado interior si algunos estados miembros no hubieran adoptado las directivas básicas mientras que los demás hubieran cumplido con sus obligaciones al respecto. La respuesta fue que los bancos de los países cumplidores habrían recibido el pasaporte europeo sin problema alguno. Con respecto a los bancos de los países no cumplidores, los países receptores hubieran retenido algunos derechos basados en la buena consideración pública, si bien solamente si pudieran probar que la supervisión en los países correspondientes no era equivalente a la dispuesta por las directivas mencionadas. Afortunadamente, esta discusión se ha convertido en puramente académica; naturalmente, existe aún el problema de determinar si las diversas legislaciones han adoptado las directivas correspondientes de una forma correcta. Ello necesitará algún tiempo antes de que la Comisión pueda realizar un estudio completo al respecto. Sin embargo, ya se han identificado algunos problemas de interpretación que han precisado de discusiones posteriores con las autoridades nacionales competentes.

Resultaría muy prolijo mencionar aquí todos estos problemas. Solamente diré que acerca de algunos de ellos los estados miembros y la Comisión han coincidido en su interpretación; sobre otros no ha habido acuerdo y las discusiones continúan, y en algunos puntos se puso de manifiesto que el texto existente no era perfecto y que requería alguna corrección.

Lo que quiero subrayar, en conclusión, es que existe una cooperación muy estrecha entre la Comisión y las autoridades de supervisión de la UE, con el fin de poner en marcha las numerosas directivas bancarias de la manera más suave y armonizada posible.

NOTAS

- (1) 77/780/CEE - OJ, n.º L 322, de 17 de diciembre de 1977.
- (2) 89/646/EEC - OJ, n.º L 386, de 30 de diciembre de 1989.
- (3) 88/361/EEC - OJ, n.º L 178, de 8 de julio de 1988.
- (4) 483/350/EEC - OJ, n.º L 193, de 18 de julio de 1983.
- (5) 89/299/EEC - OJ, n.º L 124, de 5 de mayo de 1989.
- (6) 89/647/EEC - OJ, n.º L 386, de 30 de diciembre de 1989.
- (7) 92/30/EEC - OJ, n.º L 110, de 28 de abril de 1992.
- (8) 92/121/EEC - OJ, n.º L 29, de 5 de febrero de 1993.
- (9) 87/62/EEC - OJ, n.º L 33, de 24 de febrero de 1987.
- (10) 86/635/EEC - OJ, n.º L 372, de 31 de diciembre de 1986.
- (11) 89/117/EEC - OJ, n.º L 44, de 16 de febrero de 1989.
- (12) 91/308/EEC - OJ, n.º L 156, de 28 de junio de 1991.
- (13) 93/6/EEC - OJ, n.º L 141, de 11 de junio de 1993.
- (14) 93/22/EEC - OJ, n.º L 141, de 11 de junio de 1993.
- (15) 87/63/EEC - OJ, n.º L 33, de 4 de febrero de 1987.
- (16) COM(92)188 - OJ, n.º C 163, de 30 de junio de 1992.
- (17) COM(93)363 definitiva - OJ, n.º C 229, de 25 de agosto de 1993.